

## **II. NOTAS DE INVESTIGACIÓN**

MAYRA GONGORA (1945). Lic. en Historia. Investigadora del Departamento de América Latina en el CEA.

### **La crisis político - militar del Estado guatemalteco en los 80**

**La adopción de medidas extremas de terror ha sido la característica más notoria de la política con que el gobierno militar guatemalteco ha tratado de detener la crisis social**

## **INTRODUCCIÓN**

El presente trabajo intenta presentar una panorámica de la situación política existente en Guatemala en la década de los 80 a través de sus aspectos económico, político-militar y social, lo que nos permitirá ubicar las perspectivas que en el plazo inmediato y mediano tienen tanto la clase dominante como el movimiento revolucionario. No se trata de un estudio estructural de la sociedad guatemalteca, que resultaría demasiado ambicioso para los alcances de este esbozo; no obstante, intentaremos brindar, en la medida de nuestras posibilidades, los elementos que contribuyen a la mejor comprensión de nuestro propósito.

El período seleccionado para el análisis es precisamente el de la década de los 80 porque desde nuestro punto de vista es este el momento en que, como consecuencia de la profunda crisis económico-política que afecta al sistema y de la agudización de las contradicciones en el plano social, el Estado guatemalteco, con el imprescindible apoyo del imperialismo, se ve obligado a adoptar una estrategia política que, sin apartarse de los lineamientos de la anterior, la supera y eleva el proyecto contra insurgente a su máxima expresión al insertarlo en los sectores fundamentales de la vida nacional. Esta nueva dimensión que adopta la contrainsurgencia constituye el rasgo fundamental de esta etapa, en la que se hacen insalvables las contradicciones interoligárquicas como resultado de la crisis económico-política.

El año 1954 constituye el punto de partida para cualquier análisis político de la situación de Guatemala. Después de la violenta interrupción del proceso reformista de carácter democrático-burgués, se instauró una vía de desarrollo capitalista bajo la premisa de la supuesta coexistencia armoniosa entre todos los sectores que propiciaron el derrocamiento; es decir, entre la oligarquía terrateniente y comercial que fue afectada por la Reforma Agraria y los sectores emergentes de la burguesía que no tuvieron la visión suficiente para comprender que iban a ser ellos, precisamente, los más beneficiados por las medidas del período. Ese año se afianzó el pacto político de la clase dominante con el imperialismo norteamericano, actor fundamental en un golpe cuyo brazo ejecutor fue el ejército. Para el pueblo guatemalteco el hecho se tradujo en el derrumbe de las conquistas políticas logradas durante los gobiernos de Arévalo y Arbens y en el inicio de un acelerado proceso de depauperación que afectó fundamentalmente a las clases más pobres: el proletariado y el campesinado.

A partir de esa fecha el sistema de dominación ha tenido que apoyarse en mecanismos de violencia para poder sobrevivir y reproducirse. Conjuntamente con la crítica situación social de extensas capas de la población, ello determinó una agudización de la lucha de clases cuyo carácter violento ha ido creciendo hasta alcanzar uno de sus puntos más altos en la actualidad.

La situación de depauperación social y el ejercicio de la coerción por parte del Estado constituyen la base de la endeblez estructural que afecta al bloque dominante en su ejecutoria, ocasionada por una ausencia cada vez mayor de las cuotas mínimas indispensables de consenso político para poder llevar adelante su gestión. Esta situación, que se ha convertido endémica en el sistema, determina una perenne inestabilidad que ha tenido sus momentos más críticos en aquellos períodos en los que la agudización de las contradicciones ha determinado la elevación del nivel de lucha popular. Entre estos momentos habría que mencionar las jornadas populares de marzo-abril de 1962; el surgimiento y desarrollo del movimiento guerrillero en la década del 60 y, posteriormente, su nuevo auge a finales de los 70 e inicios de los 80, así como las jornadas de octubre de 1978.

Los mecanismos de confrontación popular se han tratado de aplastar a través de modernas técnicas contrainsurgentes que conllevaron la aplicación de la política de “terrorismo de Estado”. No obstante la temporal victoria que se anotó sobre las fuerzas insurgentes en la década del 60, la contrainsurgencia demostró a la larga su ineficacia ante la elevación del nivel de la respuesta de las masas, que ha llevado la lucha armada al nivel de guerra popular.

Ante la crítica situación existente, el Estado ha demostrado su incapacidad de respuesta debido en lo fundamental a la falta de cohesión de las distintas fracciones que integran el bloque en el poder, entre las que existen contradicciones. La más poderosa de estas fracciones es aquella en la que se identifican los intereses de la burguesía agroexportadora y financiera estrechamente vinculada al capital transnacional. Existe paralelamente la cúpula de la alta oficialidad del ejército, que controla el aparato estatal y que trata de equiparse con la anterior en una desenfadada carrera de enriquecimiento por medio de negocios espúreos llevados a cabo a la sombra del poder.

La situación de fraccionamiento que existe en el seno de la clase dominante obedece sobre todo al control del aparato estatal por parte de los militares. Este factor, en el que radica una de las contradicciones del modelo impuesto por el imperialismo —en la medida en que las contradicciones que genera desataron una crisis que hizo trizas esa fórmula— motiva un rígido control de los mecanismos electorales que cierra el acceso al poder a elementos no pertenecientes o desvinculados al ejército, e imposibilita cualquier intento mínimo de reformas a favor de una disminución de la tensión social. Al mismo tiempo, la inflexibilidad impuesta determina que ni aun con la implantación de medidas represivas extremas el sistema logre un punto de estabilidad que le permita consolidarse, y que caiga en una crisis permanente que se caracteriza por los sucesivos golpes de Estado como corolario de la lucha por el poder.

## **CRISIS POLÍTICA: LA LUCHA POLÍTICA Y DE CLASES (PROCESO ELECTORAL)**

La manifestación de la crisis política en Guatemala en el período de 1978-1983 se caracterizó por tres rasgos fundamentales: por una parte, una crisis de hegemonía puesta en evidencia por la cada vez mayor falta de legitimidad del Estado; por otra, por la agudización de las contradicciones dentro de la clase dominante y, por último, por la indestructible presencia de las fuerzas revolucionarias que afectan seriamente la estabilidad del sistema. Este último factor aparece como determinante, dado que será el que forzará al sistema a adoptar estrategias específicas que serán en definitiva las que lo definirán.

El ascenso del general Romeo Lucas García al poder tuvo como preámbulo la masacre de Panzós<sup>1</sup>. Este hecho, sin precedentes por su magnitud en la historia guatemalteca de las últimas décadas, marcaría la tónica terrorista del gobierno que se iniciaba. La proliferación de organizaciones paramilitares anticomunistas que actúan con toda impunidad, la asunción de un papel cada vez más represivo por parte del ejército, las matanzas colectivas, el asesinato de personalidades y la censura de prensa serán las características más notorias del régimen de virtual estado de sitio imperante que se establece.

Hasta ese momento, la clase dominante había ejercido su hegemonía sobre la base del apoyo que podía recaudar de los sectores medios y de la pequeña burguesía, ya que el nivel de crisis social imperante hacía imposible obtenerla de los sectores populares. Pero en la medida en que avanzó el período de gobierno luquista esta relación se fue desintegrando hasta desaparecer casi por completo debido a la ampliación violenta de la represión y el terror que golpeó de manera espectacular a los sectores medios, haciendo desaparecer en un período relativamente breve de tiempo las únicas alternativas políticas de centro existentes en el país.

Como representante de la alta jerarquía militar que se enriqueció a través de métodos espúreos aprovechando su posición, Lucas monopolizó privilegios y elevó los métodos de terror a una gradación superlativa. Creó un clima de inestabilidad y descontento que contribuyó a la agudización de las contradicciones interclasistas y a la polarización de fuerzas, y al mismo tiempo, a las pugnas internas. Ello afectó al conjunto del sistema cuyo equilibrio puso en quiebra. El desprestigio internacional y el aislamiento en que se sumió el régimen fue de tal naturaleza que incluso el imperialismo se vio obligado a hacer declaraciones públicas y a restringir en cierta medida la asistencia militar para intentar despejar, hasta donde era posible, sus relaciones con el régimen.

Su administración se caracterizó por su incapacidad de maniobra y por una falta de lucidez que le impidió comprender que precisamente en la existencia de un juego

---

<sup>1</sup> El 29 de mayo de 1978 los campesinos del poblado de Panzós, capital de la municipalidad de ese nombre, en el Departamento de Alta Verapaz, se congregaron pacíficamente en la plaza central para protestar por el despojo de tierras y por el secuestro de sus hombres a manos del ejército. El destacamento local secundado por los finqueros de la zona, abrió fuego contra la multitud dejando un saldo de más de cien muertos entre hombres, mujeres, niños y ancianos.

político y en la actuación de partidos de oposición, aunque fuera bajo control oficial, estaba el escenario en el que se podría garantizar el desarrollo ulterior del desempeño de los militares al frente del gobierno. La incomprensión de esta premisa elemental en el sistema rompió definitivamente el precario equilibrio sobre el que este se había basado y desencadenó una crisis de la que ya no se repondría más.

Con el público y brutal asesinato de los líderes centristas y los golpes posteriores propinados a esos partidos se borró de golpe cualquier esperanza de solución mediante la vía electoral. Lucas García no sospechó que este iba a ser un error que pagaría con la pérdida definitiva del imprescindible apoyo que hubiera podido obtener de las capas medias<sup>2</sup>.

En este hecho está la antesala de la muerte del intento de apariencia de legitimidad en que tanto se habían esforzado los gobiernos precedentes. Los que le sucedan sólo podrán llegar al poder mediante golpes de Estado y aunque desde su arribo al poder se pondrán paradójicamente como meta el restablecimiento de la falsa legalidad electoral, única proclamada como válida por el sistema, hasta el momento les ha resultado imposible.

El terror, desatado en uno de sus períodos de mayor auge en la capital, arremetió indiscriminadamente contra estudiantes universitarios y profesionales miembros de las capas medias, independientemente de su filiación política, contribuyendo a profundizar la pérdida de consenso anteriormente apuntada. Al mismo tiempo, las depredaciones de los cuerpos armados, que se dirigían contra toda la población, también afectaron a estas capas<sup>3</sup>.

Al terminar el período de Lucas los síntomas de deterioro del sistema como conjunto y dentro del bloque en el poder evidenciaban que habían llegado a sus límites. Los elementos no militares, un sector del ejército y el propio imperialismo eran partidarios de una solución aperturista que, por medio de un proceso electoral, colocara a la cabeza del Estado a quienes fueran capaces de solventar la crisis por la que atravesaba la sociedad en su conjunto y que resultaran capaces de restituir la imagen internacional del régimen.

Hacia finales de 1981 y principios de 1982 la lucha guerrillera había alcanzado un nivel de intensidad tal que el ejército oficial, con sus inmensos recursos, no sabía detener. Ante tal situación se imponía a la clase dominante la necesidad de

---

<sup>2</sup> El Dr. Alberto Fuentes Mohr, exministro de Relaciones Exteriores y líder del Partido Socialista Democrático (PSD) fue asesinado en plena calle el 25 de enero de 1979. El crimen se produjo un día antes de que se hiciera efectiva la inscripción del PSD como partido legal. Posteriormente, el 12 de junio de ese mismo año fueron asesinados los dos nuevos líderes del PSD. Manuel Colom Argueta, líder del Frente Unido de la Revolución (FUR) y exalcalde de ciudad Guatemala, fue asesinado el 22 de marzo de 1979 en una aparatosa operación realizada en una céntrica calle capitalina desde dos autos y supervisada por un helicóptero del ejército. El crimen se produjo dos días después de la inscripción del FUR como partido legal. Su sepelio se convirtió en una Imponente manifestación de duelo popular.

<sup>3</sup> Como ejemplo podría citarse el hecho de que al producirse el golpe de Estado del 23 de marzo de 1982, el pueblo asaltó la residencia de Donaldo Álvarez, ministro del Interior durante los gobiernos de Kjell Laugerud y Romeo Lucas. Se encontraron en sus sótanos más de cincuenta autos reportados como robados por sus propietarios.

implementar un nuevo estilo de gobierno que, sin alterar ni la estructura del sistema ni su esencia represiva, encontrara la vía eficaz para neutralizar la insurrección armada popular y fuera capaz de imprimir un impulso a la economía que hiciera posible sobrevivir al naufragio que se vislumbraba. Desde mediados de los 60 los procesos electorales en Guatemala han sido manipulados para asegurar el control del poder por parte de los militares, aun cuando se haya colocado a un civil al frente del gobierno. Al llegar a su término el período de gobierno de Lucas la situación presentaba otros matices y existía consenso entre los elementos más lúcidos de la clase dominante de que la propuesta de aquel de nombrar su sucesor al ministro de Defensa, general Aníbal Guevara, era un error que no haría sino reforzar las críticas condiciones existentes y que pondría en peligro la supervivencia del sistema. Las elecciones de 1982 se convirtieron en un verdadero campo de batalla de los partidos políticos tradicionales, expresión de las diversas fracciones del bloque en el poder que luchaban por arrebatar el mando a la camarilla militar y a la fracción burguesa que los apoyaba. Los cuatro candidatos derechistas a la presidencia —Aníbal Guevara, Alejandro Maldonado Aguirre, Mario Sandoval Alarcón y Gustavo Anzueto Vielman— se caracterizaban por su espíritu antidemocrático, su furibundo anticomunismo y su resistencia a llevar a cabo transformaciones de beneficio popular. Presentaron programas políticos muy similares que coincidían en que la meta fundamental de su gobierno debía ser acabar con la subversión, asegurar el dominio de la burguesía y combatir la delincuencia común.

Entre los cuatro, el que presentaba un matiz más moderado en su discurso era Maldonado Aguirre, representante de la Unión Opositora integrada por el PNR-DC. Maldonado Aguirre señaló el carácter contraproducente de los procedimientos represivos para combatir la violencia y expresó que además de la subversión política existía una subversión social que debía ser enfrentada con medidas sociales que contribuyeran a solucionar las causas de la insatisfacción popular.

En el marco de las opciones que se ofrecían como solución, un candidato civil resultaba más adecuado que uno militar. Entre los primeros fue precisamente Maldonado Aguirre el candidato del gobierno norteamericano, por las características señaladas de su programa, más acordes con el modelo de democracia representativa impulsada por el imperialismo y más adecuado para brindar una cobertura de apariencia legal al vasto plan contra insurgente que se fraguaba, cuyo ejecutor no podía ser otro que el Ejército Nacional.

Entre todas, la candidatura de Guevara era la peor en su carácter de continuista de la camarilla luquista y porque su incapacidad era tan notoria como la de su predecesor. Existía consenso sobre este aspecto entre todas las fracciones burguesas que se le enfrentaron abiertamente, aunque estas no fueron capaces de unirse en un frente opositor consolidado.

Desde mucho antes de celebrarse las elecciones, se produjeron reiteradas denuncias del fraude que se preparaba. Se hacía cada vez más evidente el agotamiento del mecanismo electoral como vía de acceso al poder para las fracciones de la burguesía no aliadas a la camarilla militar.

Para estos sectores la alternativa del golpe de Estado como única posibilidad para su futuro era ya una realidad cuando se conocieron los resultados del proceso cuyo resultado fue la “elección” de Guevara. Con el fraude se agudizó la pugna interburguesa y se retiró, al menos transitoriamente, el apoyo del imperialismo a la camarilla. Para el gobierno norteamericano, el Presidente impuesto significaba la continuación de una concepción de gestión estatal que había demostrado su ineficiencia para controlar la situación interna y que ponía en peligro una zona de influencia que debía asegurar por sobre todas las cosas en la coyuntura regional específica, que se caracterizaba por el triunfo sandinista de Nicaragua y por el auge del movimiento revolucionario salvadoreño.

Esta situación condujo a que la clase dominante, con la anuencia imperialista, determinara romper los cánones de la ficticia legalidad burguesa impuesta con el fin de justificar por la vía electoral la presencia de la dictadura militar. La farsa democrática, que trató de ser reforzada en 1966 con la colocación de un civil al frente del Estado, tuvo que ser violada por los mismos que la habían concebido<sup>4</sup>.

De este modo, al amanecer del 23 de marzo de 1982 el general Romeo Lucas era depuesto por oficiales del mismo ejército que lo había elevado al poder y lo había mantenido durante casi cuatro años. Con la caída del gobierno constitucional se derrumbó además su aparato político y se disolvieron los partidos, algunos de cuyos dirigentes apoyaron el golpe que, según estimaron entonces, iniciaba una nueva etapa en la vida del país.

El general Efraín Ríos Montt fue la figura principal de la Junta Militar de Gobierno, integrada por otros dos oficiales de alta graduación. A pesar de su currículum contra insurgente, a Ríos Montt no se le identificaba con los grupos afines a la alta jerarquía militar por la postura opositora que había adoptado durante el proceso electoral de 1974, en el que obtuvo el apoyo de partidos políticos y de los sectores medios de la población. El triunfo obtenido entonces en las urnas le fue escamoteado en favor del general Kjell Laugerud. Desde entonces Ríos Montt, que aceptó cobardemente el fraude, vivía en un cómodo exilio diplomático en Madrid, lo que lo desvinculaba de posibles compromisos con la camarilla luquista y con la corrupción administrativa que caracterizó al período anterior de gobierno.

Los golpistas pretendían solucionar la crisis nacional con la puesta en marcha del “Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo” que tenía como meta fundamental la supresión del movimiento revolucionario. Se trataba de los lineamientos teóricos de un bien pensado plan que integraba medidas socioeconómicas y políticas a través de las que la contrainsurgencia asumía una nueva dimensión. Sus bases eran llevar a cabo una reforma fiscal que contribuyera a aliviar los efectos de la crisis económica y que creara un fondo para la contrainsurgencia: desarrollar un proceso aperturista y de

---

<sup>4</sup> Julio César Méndez Montenegro (1966-1979), antiguo líder estudiantil, profesor universitario, firmó un pacto con el ejército por medio del cual de hecho renunciaba al poder real. Durante su gobierno se inició la campaña contrainsurgente con asistencia de un contingente de “Boinas Verdes”.

retorno a la constitucionalidad que legitimara la institucionalidad burguesa y que sin menoscabar el papel que necesariamente debía desempeñar el ejército en un aparato estatal puesto al servicio de la contrainsurgencia, al menos lo disimulara a los efectos propagandísticos; destruir a la guerrilla y, finalmente, fortalecer sus relaciones con el gobierno norteamericano y lograr el restablecimiento de la ayuda militar suspendida desde 1977.

El plan iba acompañado por un discurso demagógico que prometía el restablecimiento de la paz nacional, la democracia, la justicia, el respeto a los derechos humanos, el fortalecimiento de la imagen internacional del gobierno y el procesamiento de los responsables de la represión y la corrupción. Con ello se trataba de contribuir a obtener una fachada de legalidad que justificara la millonaria ayuda económica y militar del imperialismo, sin la cual resultaba imposible poner en marcha el plan.

Desde el punto de vista político la estrategia diseñada perseguía ampliar las bases del sistema y recuperar la hegemonía. Un análisis de este proyecto indica, como se evidenció en el transcurso de la gestión de Ríos Montt, un esbozo de proyecto nacional verdaderamente fascista, para el que resultaba imprescindible la búsqueda de apoyo en las clases medias. De ahí todo el esfuerzo desplegado por aminorar la tensión y la represión en el área urbana, especialmente en la capital. Toda la instrumentación ideológica y propagandística perseguirá el mismo fin.

En este aspecto las medidas más sobresalientes fueron la promulgación de un decreto de amnistía que perseguía minar las bases de la guerrilla, instaurar el Estado de sitio, crear los Tribunales de Fuero Especial, que hicieron impreciso el límite entre la oposición y la subversión sometiendo a su jurisdicción a cualquier persona que formulara alguna crítica al gobierno, lo que lo excluía automáticamente del decreto de amnistía. Se creó asimismo un organismo legislativo, el Consejo de Estado, verdadera caricatura de la democracia representativa, integrado con nombramientos formulados por el dignatario. En él se suponían representadas todas las clases sociales y sectores de la población, incluyendo diez delegados indígenas. Incluso los partidos políticos derechistas no aceptaron participar en el órgano debido a su escasa posibilidad de maniobra. Las asociaciones de prensa asumieron igual postura como resultado de la censura. En realidad careció de representatividad y culminó en un rotundo fracaso como consecuencia de la renuncia de muchos de sus miembros y de las protestas de otros, debido a la inoperancia a que el caprichoso manejo del Presidente lo sometió. Como nota pintoresca del período se debe señalar la vasta campaña moralizadora de la que Ríos Montt fue el vocero principal, en la que se mezclaban elementos religiosos, y cuyo único resultado fue el aumento de los gastos del erario público determinado por la gran cantidad de recursos invertidos en ella.

El hecho de ser Ríos Montt un personaje no identificado con los sectores que se disputaron el poder en 1982, el factor de ser un elemento ajeno a la alta jerarquía militar enriquecida por medio de la corrupción y el de haber sido candidato presidencial en 1974 por una coalición de centro izquierda, creó en los inicios de su período de mandato una expectativa en torno a su posible papel, especialmente en

algunos sectores urbanos. Esto y el apoyo de que gozó inicialmente por parte del imperialismo le permitieron, apenas dos meses después del ascenso de la Junta Militar, consolidar su poder personal, eliminando a los otros dos miembros del triunvirato.

En las medidas económicas, políticas y diplomáticas del nuevo gobierno el papel decisivo lo desempeñó el factor militar. Se implementó un vasto plan contrainsurgente que abarcó tanto el área urbana como la rural, que se complementó con medidas de guerra psicológica y con campañas de acción cívico-militar. En este último aspecto se desarrolló el llamado “Plan de Ayuda a las Áreas en Conflicto” (PAAC), bajo la dirección de un Estado Mayor Especial. En sus diversas modalidades el plan estaba dirigido a aislar a la población que pudiera servir de potencial base de apoyo a las guerrillas y colocarla bajo jurisdicción militar. En este sentido, se llevó a cabo una amplia labor ideologizante en la que las sectas fundamentalistas desempeñaron una importante función. Esta fue además una vía para la explotación de mano de obra, ya que se utilizaba a esta población para llevar a cabo obras de infraestructura militar por un salario irrisorio que se pagaba en especies, generalmente en alimentos.

Desde el punto de vista de la política exterior, el objetivo principal del nuevo gobierno consistió en consolidar la alianza con el imperialismo norteamericano y con Israel: en tratar de mejorar sus relaciones con el gobierno mexicano y en desarrollar sus relaciones con los gobiernos tiránicos del Continente con el objetivo de encontrar una base internacional que le permitiera contrarrestar la tétrica imagen que la política de terror había proyectado al exterior, así como su carácter de gobierno ilegítimo, llegado al poder por medio de un golpe.

Internamente una de las vías aperturistas que siguió el nuevo gobierno fue la de la disminución del número de firmas establecidas por la ley para oficializar los partidos políticos, lo que abrió el camino de participación en las elecciones a sectores de la pequeña burguesía y las capas medias. Esta medida pretendía ser la contrapartida a la violencia política del período anterior, que arremetió contra estos sectores, entre otros. Temporalmente ello tuvo consecuencia favorables al régimen, porque contribuyó de modo parcial a neutralizar a estos sectores a los que abría repentinamente el acceso a la arena política.

La maniobra encerraba, por una parte, el propósito de ganar un área de consenso y, por otra, dividir a la oposición. Al promover la proliferación de agrupaciones políticas, se evitaba que alguna de ellas llegara a convertirse en una fuerza real de oposición. La fragmentación alcanzó incluso a las fuerzas políticas de derecha y centroderecha ya existentes, al promover y facilitar el desarrollo de intereses personales. La posibilidad de participación legal de ciertos sectores medios en la vida pública era una vía para aislarlos de las fuerzas más radicales de la izquierda, especialmente las directamente implicadas en la lucha armada, que desde un principio denunciaron el carácter demagógico de esta política y se negaron a tomar parte en la componenda.



En su conjunto la maniobra electoral era parte del principio contrainsurgente de fomentar la división en el seno de las fuerzas políticas y sociales en todos los niveles y, al mismo tiempo, uno de los requisitos planteados para tratar de obtener un mayor apoyo de la administración Reagan y para legitimar la imagen internacional del régimen.

La nueva legislación ignoró todos los partidos políticos que ya habían sido declarados ilegales a raíz del golpe del 23 de marzo de 1982, a la vez que establecía el mecanismo para que las antiguas agrupaciones políticas y las que surgieran adquirieran el carácter legal necesario. Las cincuenta mil firmas necesarias para fundar un partido fueron reducidas a cuatro mil con el objetivo de facilitar la fragmentación deseada. El resultado fue la escasa representatividad de la mayoría de las organizaciones que surgieron. Proliferaron igualmente los comités políticos, en su mayoría resultado del desmembramiento de partidos ya existentes, y para cuyo reconocimiento oficial sólo era necesaria la irrisoria cantidad de cuarenta firmas.

La instauración del Registro de Ciudadanos constituyó un mecanismo represivo legal ideado con el objetivo de controlar a los votantes. El repaso para la confección del mismo, consistente en un complicado trámite burocrático, se tomó como pretexto para aplazar las anunciadas elecciones, aunque la verdadera razón residía en la ausencia de condiciones para un proceso semejante con participación popular.

La anunciada “apertura democrática” quedó, pues, encasillada en los estrechos márgenes de un juego leguleyo entre micropartidos de filiación proimperialista y anticomunista, confirmada por la negación de las fuerzas de izquierda a participar en el mismo. Este factor hubiera sido necesario al régimen para dar un carácter de mayor autenticidad a su maniobra. Como consecuencia de la legislación electoral llegaron a coexistir alrededor de treinta agrupaciones políticas que se caracterizaban por su inconsistencia orgánica y política, muchos de ellos ostentando nombres que ni siquiera dejaban entrever su filiación.

La posposición de las elecciones a propósito del complicado mecanismo ideado para llevarlas a cabo constituyó una fuente de conflictos entre las distintas fuerzas políticas que aspiraban a una cuota de poder. Los dirigentes de los partidos Democracia Cristiana Guatemalteca y el reaccionario Movimiento de Liberación Nacional acusaron a Ríos Montt de aspirar a perpetuarse en el poder.

Las tres leyes electorales<sup>5</sup> aprobadas por el inocuo Consejo de Estado, junto a la amnistía para los guerrilleros y el Plan de Reforma Agraria propuesto por la AID, fueron las primeras medidas del plan de apertura que el gobierno anunció después de un año de su ascenso al poder. La amnistía, pregonada en los primeros días del golpe y en la que nadie creyó por el rechazo de que fue objeto por parte de las organizaciones revolucionarias, no pudo ser reeditada debido al elevado costo que implicaba su propaganda. El proyecto agrario, al igual que había ocurrido

---

<sup>5</sup> Ley orgánica del tribunal supremo electoral y de registro de Ciudadanos, Nueva Ley Electoral de Partidos Políticos y Comités Cívicos.

anteriormente en El Salvador, chocó con la violenta oposición de la burguesía terrateniente.

La Central Auténtica Nacionalista (CAN) dirigida por el exdictador Arana Osario (1970-1974) emplazó al gobierno a fijar fecha para las elecciones, acusándolo de incapacidad para resolver la crisis económica y lograr la ansiada estabilidad política. A ello debemos sumar viejas contradicciones surgidas a raíz del propio golpe, cuando los militares se negaron a compartir el poder con las fuerzas civiles que lo apoyaron, básicamente el Movimiento de Liberación Nacional y el Partido Nacional Renovador. En aquel entonces Ríos Montt se había comprometido a efectuar elecciones en un plazo no mayor de tres meses. La lucha interpartidista se encarnizó hasta el punto de que el dictador insultó públicamente a todos los políticos y los acusó de ladrones y mentirosos, con la toma de represalias directas contra muchos de ellos.

El generalizado descontento entre los representantes de todos los partidos no era más que la expresión de las contradicciones generadas por Ríos Montt dentro de la clase dominante y la situación de descontento existente en sus distintas fracciones por la reforma tributaria que afectaba el sector industrial y financiero y recargaba la ya depauperada situación de la población. La demanda de elecciones se fue haciendo más imperativa y se acompañaba por la exigencia de anulación de los tribunales de fuero especial.

Estas contradicciones coadyuvaron al deterioro de la imagen del dictador, que después de un año de gobierno había generado contradicciones con las fracciones industrial y comercial, sectores del ejército, la Iglesia católica e incluso el imperialismo. En gran medida la base de estas diferencias estuvo en la errática postura que adoptó el mandatario, que no fue capaz de obtener el apoyo de casi ningún sector para llevar adelante su plan contrainsurgente, debido en lo fundamental al incumplimiento de los compromisos contraídos en su programa de gobierno. La crisis económica se profundizó y con ello se agudizó la situación social; la reforma fiscal sólo sirvió para soliviantar los ánimos de los sectores sobre los que recayó. El proceso de retorno a la constitucionalidad se desintegró ante medidas tales como la suspensión de la Constitución y su sustitución por un Estatuto Fundamental de Gobierno que restringió las garantías y los derechos individuales. Mediante ello la Junta de Gobierno centralizó los poderes estatales, atribuyéndose el nombramiento del Presidente, los magistrados y jueces. Otras medidas que atentaron contra la prometida constitucionalidad fue la disolución de facultades ejecutivas y legislativas, la anulación de la autonomía municipal, la destitución de todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia y de los tribunales colegiados, la intervención del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y la cancelación de los partidos políticos.

El prometido respeto a los derechos humanos se tradujo en el asesinato de cientos de miles de personas, especialmente en las áreas rurales —se calculan entre trece y quince mil las víctimas— como consecuencia de la política de “tierra arrasada”. El terror se vio reforzado con la declaración del estado de sitio y los tribunales de fuero especial. El 13 de marzo de 1983, en uno de sus acostumbrados discursos dominicales, el propio Ríos Montt reconoció que se estaba elaborando un nuevo

decreto de amnistía para tratar de compensar esta situación: “sabemos y comprendemos que hemos pecado, que hemos abusado del poder y queremos reconciliarnos con el pueblo...”

La campaña de lucha contra la corrupción y la promesa de procesar a los responsables de las depredaciones y crímenes durante el período de Lucas culminó en la absolución por falta de pruebas de los cuarenta funcionarios intermedios acusados, mientras que ninguno de los altos jefes militares sustituidos después del golpe fue procesado. Al mismo tiempo para nada se mencionó a los responsables de las masacres y otros crímenes cometidos contra la población.

Por otra parte, Ríos Montt generó contradicciones con la jerarquía eclesiástica católica, mayoritariamente en el país, por su filiación a la secta Iglesia del Verbo, la que de hecho elevó al rango de religión oficial. La manipulación del factor religioso por parte del Jefe de Estado en una dimensión desconocida hasta el momento, devino un rasgo muy peculiar de su período de gobierno. Ríos Montt hizo gala de un afán evangelizante en sus comparecencias televisadas semanales, que tenían lugar como una misa, cada domingo. Esto, que tuvo rasgos demenciales al declarar reiteradamente el origen divino de su mandato, acabó por destruir las escasas simpatías de que hubiera podido gozar a nivel popular debido a la filiación católica de la mayoría del pueblo guatemalteco.

Ríos Montt no sólo no fue capaz de lograr la unidad, sino que promovió la división y las disputas internas con la separación de los dos triúnviro que representaban sectores de intereses dentro del ejército y con la presencia de los oficiales jóvenes que atentaban contra las arraigadas concepciones de la alta jerarquía castrense. Solamente en 1982 se produjeron cinco intentos de golpe de Estado contra Ríos Montt, que manejó arbitrariamente nombramientos sin respetar el escalafón, lo cual contribuyó a generar un clima conspirativo. En ello incidía el fracaso de las aparatosas campañas contrainsurgentes lanzadas contra los frentes guerrilleros. Esta, que había sido una de las razones de ser del gobierno, acabó con su maltrecha credibilidad y marcó definitivamente su caída. Al mismo tiempo, los nulos resultados obtenidos en el campo militar influyeron decisivamente en el retiro del apoyo norteamericano. Ríos Montt no logró situar al país en condiciones que le permitieran participar activamente en el conflicto centroamericano y con ello se daba por terminada la justificación de su presencia.

## **MEJÍA VÍCTORES**

El desgaste experimentado por el régimen de Ríos Montt debido a los fracasos en el plano militar, las contradicciones internas, la crisis económica y la ineficacia total de su gestión administrativa llegaron a su límite en los inicios del mes de agosto. Terminaba así otro período de gobierno contrainsurgente que tuvo como uno de sus saldos el resquebrajamiento de la sociedad con la profundización de la crisis que la afectaba en su conjunto. Nuevamente quedaba sin cumplir el objetivo fundamental de todo régimen de terror: la destrucción del movimiento revolucionario.

La proclama del Alto Mando del Ejército, leída en la cadena nacional de radio y televisión en la mañana del 8 de agosto, informó a la población el acuerdo de sustituir a Ríos Montt por unanimidad y que el general Mejía Víctores ocuparía simultáneamente la jefatura del Estado y la cartera de Defensa: Se formulaban críticas al mandatario depuesto y se enfatizaba la necesidad de “preservar, conservar y fortalecer la unidad del ejército”, asegurando que el golpe se llevaba a cabo “en aras de la unidad nacional”. Se afirmaba nuevamente la decisión del ejército de “luchar para erradicar la subversión y continuar el proceso de retorno a la constitucionalidad”, con la apelación de la búsqueda de nuevas fórmulas para lograr este propósito.

El nuevo gobierno intentaba reconstruir la base de apoyo político, especialmente en la clase dominante y el ejército, sin tomar en consideración los sectores medies. Con este objetivo trató de solventar las contradicciones que habían motivado fricciones dentro de la clase dominante, lo que conllevaba una derechización del régimen hacia planteamientos más conservadores. Entre estos esfuerzos se inscriben los cambios operados en el gabinete.

El nuevo golpe va a representar un esfuerzo por realizar la política trazada para la etapa anterior. Se siguen al pie de la letra los principios básicos del Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo, y al igual que entonces, se tratará de insertar a Guatemala activamente en los planes imperialistas de regionalizar la guerra en Centroamérica, para lo cual previamente se necesitará destruir todas las expresiones revolucionarias a nivel nacional. El intento estará encaminado a buscar un alineamiento más definido del ejército guatemalteco que el que se había obtenido con Ríos Montt, especialmente ante la posibilidad de una agresión a Nicaragua. Ríos Montt se había mostrado renuente a brindar una colaboración en este sentido por no estar militarmente preparado para desarrollar la guerra en dos frentes.

Mejía se lanza a la arena política con un discurso agresivo, directo, y, a diferencia de Ríos Montt, no cuida la retórica ni pretende dictar normas moralizantes. Se habla sin ambages de la necesidad de reactivar el CONDECA, se amenaza a Nicaragua y se toman medidas concretas para tratar de integrar al ejército en los planes intervencionistas. Al mismo tiempo, trata de aparentar transformaciones de fondo. Para ello implementa una serie de supuestos cambios caracterizados por su demagogia y en muchos casos por su inocuidad, con el fin de transformar la imagen pública del gobierno, especialmente ante el de los Estados Unidos, de quien necesita ayuda económica y militar.

Su plataforma de gobierno en este sentido es explícita. Primero, subraya la firme decisión de combatir “la subversión marxista-leninista” y los grupos paramilitares que pudieran existir para proteger así al pueblo de Guatemala; segundo, se propone fortalecer la organización popular a través de la autodefensa civil, eliminando su instrumentalización religiosa o política; tercero, garantizar la autonomía judicial, suspender los tribunales de fuero especial y garantizar que los problemas del área sean resueltos por los propios centroamericanos.

El papel regional que debería desempeñar el nuevo gobierno en los planes imperialistas fue una de las armas que esgrimió Mejía para presionar a las distintas fuerzas políticas a realizar una tregua que le permitiera ganar tiempo para estabilizar su poder a corto plazo. Con este fin se entrevistó con los representantes de los distintos partidos, en reuniones separadas, a quienes solicitó apoyo y a los que prometió la celebración de elecciones una vez ejecutado el plan. Con ello trataba de neutralizarlos y al mismo tiempo de posponer a un plazo indefinido la celebración de elecciones y, por ende, la entrega de poder. No obstante, en vez de aportar la estabilidad ansiada, estas negociaciones bilaterales desataron tensiones y promovieron pactos y compromisos entre distintas fuerzas de derecha, una de cuyas respuestas por parte del régimen ha sido el cambio de estructura operado en el seno del ejército.

En un ensayo por unificar y centralizar el control de la institución armada, el 7 de diciembre se puso en vigor la Ley Constitutiva del Ejército. Por este medio se buscaba solventar la contradicción existente entre un grupo de oficiales con prebendas obtenidas a costa de batallas generalmente perdidas, en los que ya no existía credibilidad, y otros sectores que aspiraban a copar posiciones en la cúpula militar y a desempeñar un papel contrainsurgente más efectivo. Como consecuencia de esto fueron dados de baja del escalafón doce generales, entre los que se encontraban tres expresidentes constitucionales, uno ascendido al poder a través de un golpe de Estado, cinco exministros de Defensa, dos exjefes de Estado Mayor y un exmiembro de la Junta de Gobierno. La ley, que abría el camino a las aspiraciones de muchos oficiales de relevar a los desplazados, se convirtió en un vehículo para fortalecer la jerarquía militar, tal como se proclamó en la declaración del Consejo de Comandantes Militares el 8 de agosto.

Otra de las medidas complementarias en este sentido fue el desplazamiento, a través de la salida del país para ocupar puestos diplomáticos, de otros oficiales que pudieran representar un peligro por su posición y las rotaciones o asignaciones a zonas peligrosas de combate a los no deseados, especialmente la oficialidad joven profacista, que fue uno de los elementos principales de apoyo al golpe del 23 de marzo de 1982. No obstante, todos estos cambios, adoptados a favor de la unidad, no han arrojado los resultados esperados. Las contradicciones perduran y el régimen se ha visto obligado a desplegar una amplia labor de contrainteligencia en el seno del propio ejército.

Al igual que en el período anterior, el gobierno desencadenó la represión contra todos los elementos que potencial o efectivamente pudieran ofrecerle alguna oposición. Distintos grupos políticos han sido víctimas de la escalada. Los sectores medios han sido nuevamente golpeados y en las áreas rurales continúa la masacre. Los muertos se cuentan por miles y prosigue el éxodo masivo de los que huyen del infierno en que se ha convertido el campo guatemalteco buscando refugio en la frontera con México y en las montañas. Los cristianos, que han cumplido un importante papel en la base del movimiento revolucionario, también continúan siendo objeto de la saña represiva. La universidad y las ya diezmadas organizaciones sindicales presentan una situación

similar. Esta situación le valió al régimen el aislamiento de la comunidad internacional, expresado en la condena de la 38 Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1983.

Para tratar de paliar en cierta medida la inestabilidad política del régimen, Mejía Víctores, como su antecesor, pero de forma más directa, trata de buscar apoyo en el sector agroexportador para dominar a los restantes. Ya Ríos Montt lo había privilegiado en el marco de la reforma tributaria, especialmente a través de la exoneración del impuesto de contrainsurgencia. Mejía ha mantenido esos privilegios económicos que agudizan las contradicciones en el seno de la clase dominante, aunque alivian en cierta medida la situación de los grandes productores.

En líneas generales, la “recomposición” de fuerzas a que aspira Mejía se ha desarrollado especialmente sobre la base del fortalecimiento del sector agroexportador, lo que conlleva, al igual que en el período anterior, a la polarización de intereses y a la agudización de la crisis. Ello acarreará en definitiva las mismas consecuencias que entonces; es decir, rupturas y contradicciones internas con la dictadura y la imposibilidad cada vez mayor de obtener el consenso necesario.

En la medida en que avanza el tiempo estas contradicciones van aflorando, al paso que fracasan paulatinamente los lineamientos propuestos en el programa político. Hasta el momento la situación no se ha desencadenado en toda su magnitud debido a que la ayuda norteamericana se ha reanudado, al apoyo que brinda aún la camarilla al dictador y al apoyo del sector agroexportador. Sin embargo, uno de sus fracasos ya se ha hecho evidente a nivel regional con la negativa de Mejía a participar en las maniobras militares conjuntas programadas. Las perspectivas económicas que se prevén no dejan tampoco esperanza alguna de recuperación, por lo que en este campo el pronóstico es de profundización de la crisis. En líneas generales el régimen no ha aportado nada nuevo en relación a su antecesor. Todo parece prever que no lo logrará y que existen muchas probabilidades de que entre en un callejón sin salida que le haga correr el mismo fin. Su única posibilidad de sobrevivencia estaría dada en lograr aquello que todos sus predecesores no han podido obtener en más de dos decenios: liquidar a la guerrilla. Hasta el momento las vastas campañas no parecen arrojar resultados satisfactorios para la contrainsurgencia, y si bien los revolucionarios han recibido golpes, continúa su desarrollo y fortalecimiento. Sólo una vez suprimida la “subversión” el gobierno estaría en condiciones de desarrollar una política que le permitiera superar la crisis económica que afecta no sólo al pueblo, sino también a sectores de la propia clase dominante. No obstante, todo parece indicar que es una vía cerrada para siempre.

Contra todo lo que esperaba el gobierno, el imperialismo, las fuerzas reaccionarias de la región, el ejército guatemalteco y con él la camarilla gobernante, enfrentan dificultades de tal naturaleza que de hecho su inserción en el conflicto regional se convierte en una utopía teórica. Desviar parte de sus efectivos fuera de su territorio equivaldría a poner en peligro su situación interna en un momento en que la acción de las organizaciones revolucionarias es una realidad cotidiana. La no participación del ejército guatemalteco en las maniobras “Ahuas Taras III” lo ha confirmado.

En relación al plazo de convocatoria a elecciones, el régimen se ha mostrado vacilante. Los proyectos de leyes electorales han sido sustituidos por versiones más restringidas; se canceló el criticado Registro General de Población y la Cédula de Identidad Personal, mecanismo ideado por Ríos Montt para controlar a los votantes e impedir maniobras de los partidos que poseían falsas células de votación. La nueva ley electoral fue calificada de “incongruente y discriminatoria” por los sectores ultraderechistas. Establece que las elecciones para la Asamblea Constituyente sean en julio de 1984 y las presidenciales en 1985.

Nuevamente proliferan los comités pro-formación de partidos políticos, en su gran mayoría resultado de las escisiones que han tenido lugar en el seno de los partidos tradicionales como consecuencia de la crisis por la que atraviesan. El esquema electoral que presenta Guatemala en el marco de las políticas pseudoaperturistas proclamadas por los gobiernos contrainsurgentes se hace cada vez más formal como resultado de la negación por parte de las fuerzas progresistas a participar en el juego electoral. Esto hace que carezca de credibilidad, ya que no existen opciones renovadoras ni alternativas medias que pudieran generar alguna corriente de simpatía por parte de sectores de la población. Como en el período anterior, todas las opciones que se presentan son de cariz conservador. Nuevamente florecen las disputas y la desconfianza del régimen hacia partidos o comités que no apoyen la estrategia de guerra. No resultan raras las noticias de desaparición y asesinato de dirigentes políticos involucrados en el panorama electoral.

## **EL EJÉRCITO Y EL PROYECTO CONTRAINSURGENTE**

En diciembre de 1982 el general Ríos Montt declaró: “la guerra contra la subversión ya terminó. Militarmente la guerra ha sido ganada por fuerzas de seguridad del gobierno”<sup>6</sup>. Apenas un año atrás el entonces jefe del Estado Mayor General del Ejército, general Benedicto Lucas García, había anunciado: “ya no hay guerrilleros”. En su mensaje de fin de año a la nación, el 30 de diciembre de 1983, el general Mejía Víctores expresaba: “hemos terminado con la subversión”<sup>7</sup>.

Durante alrededor de veinte años, desde el inicio de la lucha guerrillera, ha sido común que el régimen emita declaraciones de este tipo. La vida nacional gira en torno a este problema, que constituye el punto neurálgico del sistema. La implementación de los planes contrainsurgentes, en sus distintas gradaciones, se ha ido acelerando y en la misma medida en que se eleva el nivel de represión se precipita el desgaste del sistema. Una breve ojeada a la situación de los últimos años indica que el ritmo con que se aceleran las contradicciones dentro del sistema determina que se hayan acortado sus etapas estratégicas. Los fracasos militares, soportados con sus altibajas durante dos décadas, son ya insostenibles y se han convertido en el indicador por el que se mide la efectividad del régimen de turno y su período de permanencia, en el poder.

---

<sup>6</sup> ENFOPRENSA, Guatemala, enero de 1984.

<sup>7</sup> Ibid.

Durante su período de mandato Lucas García elevó la represión a extremos desconocidos hasta entonces, implantando en la práctica una política de masacre y genocidio. No obstante, independientemente del incremento en el grado de aplicación del terror, desde el punto de vista militar el régimen no obtuvo resultados correspondientes. Las dos enormes y costosas ofensivas desarrolladas hacia finales de 1981 por el ejército en el altiplano noroccidental no arrojaron victorias significativas. El panorama era tal que hacia finales de ese año las principales zonas de importancia económica del país eran escenario de acciones revolucionarias. A inicios de 1982 el panorama que se vislumbraba para el ejército era sombrío: la acción del movimiento guerrillero se había extendido considerablemente, con la elevación de su nivel operacional sin que el organismo oficial armado fuera capaz de brindar una respuesta adecuada.

Esta falta de respuesta de las tropas regulares frente al movimiento guerrillero incidió negativamente en su moral colectiva y al mismo tiempo provocó el cuestionamiento de su papel por parte de sectores del propio ejército y de la clase dominante. Entre los factores determinantes de la crisis política, sin duda alguna el fracaso militar fue el decisivo. La pérdida de autoridad del Estado se aceleró en una relación proporcionalmente inversa al desarrollo de la guerra popular revolucionaria, que no sólo había alcanzado éxitos militares notorios en los inicios de 1982, sino que además daba muestras de estar en un proceso de consolidación política cuya expresión más elevada fue la fundación de la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca (URNG) el 9 de febrero de 1982 y la emisión de un programa político de cinco puntos. En esta coyuntura resultaba más que evidente para determinados sectores de la clase dominante y para el propio imperialismo que de no producirse un viraje de la situación, la pérdida de su dominio podría convertirse en un hecho irreversible en un período de tiempo relativamente breve.

De este modo, el gobierno resultante del golpe de Estado de marzo de 1982 encaminó toda su política a tratar de obtener el control, en primer término en el terreno militar, conciente de que era en ese campo donde residía la mayor debilidad del sistema. Para ello implementó un plan estratégico que, sin variar los conceptos tradicionales de los postulados de la política contrainsurgente que se vino aplicando en el país desde la década de los 70, los llevó a cabo de manera más consecuente, porque puso en función de los mismos todo el aparato estatal.

Debido a la imposibilidad táctica de asestar un golpe definitivo al movimiento revolucionario, se implementa una estrategia encaminada a aislarlo para hacerlo caer por inanición, obstruir su capacidad operacional y neutralizar sus perspectivas políticas. Para ello el gobierno se trazó una línea estratégica cuyos aspectos fundamentales fueron: a) lograr por todos los medios el aislamiento de la guerrilla de su base social; b) tratar de enfrentar el movimiento revolucionario a la población para tratar de transformar el carácter de la guerra popular revolucionaria en guerra civil; c) tratar de crear fraccionamientos en el seno del movimiento revolucionario.

Para realizar estos objetivos se emplearon tácticas específicas. El primer rasgo a destacar en este contexto fue la disminución del nivel represivo en el área urbana.



Esto obedecía al doble propósito de tratar de obtener una base de apoyo en las capas medias de las ciudades, al mismo tiempo que concentraba la represión en la zona considerada como la que en mayor peligro ponía al régimen. El despliegue de la política de “tierra arrasada” elevó a niveles no registrados anteriormente la represión en el campo, especialmente en zonas donde se había detectado la presencia de grupos guerrilleros con la finalidad de que la población asociara la represión a este hecho. Estas acciones, desarrolladas con asesoría israelí y muy semejantes a las llevadas a cabo en Vietnam, desplegaron un enorme potencial bélico que incluía desde el ataque de tropas regulares hasta el empleo de artillería, aviación e incluso armas químicas y bacteriológicas contra poblaciones civiles desarmadas. Ello trajo como consecuencia el rompimiento de la organización social de poblaciones completas que se vieron obligadas a huir para protegerse de la saña del ejército. Grandes grupos de campesinos se refugiaron en territorio mexicano, otros permanecieron durante días sin alimentos ni techo, dispersos por las montañas, y otros muchos fueron recluidos en las llamadas “aldeas estratégicas”, equiparables a las establecidas por los norteamericanos durante la guerra de Vietnam.

El traslado de la población a estas aldeas se realizó cumpliendo un plan que inicialmente planificó su construcción alrededor de las bases del ejército con el objetivo de evitar los ataques de la guerrilla.

Al mismo tiempo se estableció una organización con vistas a servir al ejército. En realidad la desorganización con que el plan fue llevado a cabo determinó que las aldeas se convirtieran en verdaderos campos de concentración donde los habitantes se vieron obligados a vivir en condiciones de hacinamiento y carentes de las más elementales condiciones de higiene.

La mayor innovación de la nueva estrategia fue el establecimiento de las patrullas de defensa civil, cuyo fin era revertir la situación en provecho propio para tratar de asegurar al ejército bases de apoyo en la zona rural.

Esta ha sido sin duda una de las armas más peligrosas que el ejército ha empleado. Integradas por campesinos reclutados por la fuerza o por paramilitares disfrazados, en el primer caso actúan generalmente bajo la presión del miedo a ser objeto de represalias en caso de que no colaboren. Como regla, carecen de armamento debido a la desconfianza que la composición de sus filas ofrece a los propios militares. Por lo regular se encuentran bajo el mando de personas de confianza del régimen en la zona, lo que frecuentemente coincide en la persona del comisionado militar, único del grupo que recibe armamento cuando la integración es legítimamente campesina. Su moral combativa es baja, pero cumplen un papel diversionista desde el punto de vista político, que es el de enfrentar a la población autóctona de una región con la guerrilla, lo cual representa un intento de transformar la esencia del conflicto de guerra popular en enfrentamiento civil. Desde el punto de vista militar, su función consiste en desviar la atención de la guerrilla, que se ve obligada por este medio a emplear contra las patrullas tiempo y recursos que deberían estar concentrados solamente contra el ejército.

La política contrainsurgente que ideó el régimen de Ríos Montt incluyó, tal como está estipulado en sus postulados clásicos, medidas destinadas a mejorar la imagen del régimen y a aliviar en alguna medida las tensiones sociales. En este aspecto se llevó a cabo el desarrollo de obras infraestructurales fundamentalmente destinadas al ejército; se intentó abrir fuentes temporales de empleo, así como brindar algunas facilidades en el campo de la salud pública y la política alimentaria.

De especial relevancia fue el llamado Plan de Asistencia a las Áreas en Conflicto (PAAC), que se creó con el aparente objetivo de auxiliar a las víctimas de la guerra, especialmente en la región del Altiplano, y cuyos verdaderos fines eran el establecimiento de condiciones que posibilitaran la penetración del ejército en las comunidades y su permanencia en ellas con el objetivo de reorganizar a los habitantes de esas zonas o de reubicarlas, lo que obedecía al doble propósito de mantener el control estratégico y de aniquilar su organización social.

El PAAC estaba asociado al plan de creación de aldeas estratégicas y en su concepción original diversas instituciones del sector público debían pasar a depender de las comandancias militares. Era coordinado por el ejército, a diferencia de los planes normales de desarrollo, que dependen directamente de la Secretaría General de Planificación Económica.

Estas políticas se han denominado sucesivamente “fusiles y frijoles” (“las dos F”), “alimentos por trabajo”; “techo, tierra y trabajo” (“las tres T”) y “pico y pala” (“las dos P”). “Fusiles y frijoles” fue la primera en ser puesta en práctica. Como su nombre lo indica, combinaba las acciones de contrainsurgencia (fusiles) con un plan de acciones de beneficio social mínimo, consistente fundamentalmente en el suministro de alimentos (frijoles). Existe un factor psicológico de peso en la implantación de esta política, ya que el abastecimiento de cualquier producto alimenticio, por mínimo que fuera, desempeña un papel importante en poblaciones hambreadas y devastadas por la guerra. La implementación de este plan indica el interés por la reproducción de la mano de obra procedente de las zonas rurales.

En el plan denominado “alimentos por trabajo”, estos no se ofertan gratuitamente, sino como pago por tareas asignadas, sobre todo de apoyo al ejército en la realización de tareas destinadas al plan contrainsurgente, en especial obras de infraestructura logística. La labor de las mujeres se utiliza fundamentalmente en servicios complementarios.

Teóricamente las “tres T” debían sustituir a las “dos F”, lo que comenzó a ponerse en práctica a partir de 1983. Bajo el supuesto de la estabilización de un área determinada después de la aplicación de “fusiles y frijoles”, se trata de llevar a cabo un plan integral de desarrollo cuyo primer paso sería el establecimiento o reconstrucción de los; centros de población para proceder a la implantación de medidas de búsqueda de empleo y entrega de tierras. El objetivo de las “tres T” era el establecimiento de puntos poblacionales controlados por el ejército a través de la implantación de un poder local totalmente subordinado al militar. Al mismo tiempo, se lleva a cabo una labor combinada con mecanismos diversionistas que se destinaban a encubrir la verdadera naturaleza del plan.

En el plano internacional el PAAC sirvió a los fines propagandísticos de tratar de rescatar la deteriorada imagen del régimen. Buscaba brindar la idea de un gobierno preocupado por la reconstrucción en las zonas devastadas por la guerra en las que supuestamente se implementaba una política de entrega de tierras, y empleo y búsqueda, en fin, del bienestar popular. Esto sirvió de cobertura, asimismo, para recabar ayuda financiera de organismos tales como la UNICEF, el programa mundial de alimentos y otros.

Otro aspecto fundamental a destacar en la táctica contrainsurgente fue el empleo de la propaganda de guerra o “guerra psicológica”. Su objetivo era dar la imagen de un gobierno preocupado por la solución del conflicto, desvirtuar la verdadera naturaleza de los acontecimientos achacando la responsabilidad de los crímenes a los revolucionarios, tratar de debilitar a estos mediante falsas informaciones en el sentido de que la amnistía propuesta por el gobierno había sido acatada por miles de guerrilleros y de que otros tantos campesinos se habían entregado. La incesante repetición de estas falsedades y otras relativas a supuestos éxitos militares de las tropas oficiales, junto con una férrea censura de prensa, dificultó la difusión de la realidad de los acontecimientos y contribuyó a confundir y a desinformar a la población.

La religión también constituyó un mecanismo ideológico explotado por el régimen de Ríos Montt con fines contrainsurgentes. Se utilizó para tratar de sustentar la legitimidad de la represión. El régimen brindó apoyo oficial a sectas fanáticas, que desarrollaron una amplia labor en el seno de las fuerzas armadas y entre la población. Los soldados genocidas eran bendecidos regularmente por los religiosos y el Presidente se declaró asimismo como “enviado de Dios” para terminar con la subversión. Sin embargo, como ya hemos analizado, el efecto de esta labor ideologizante fue muy limitado debido a que la religión más popular en el país es la católica.

Si bien lograron detener en parte los fracasos militares constantes hacia finales de 1981, los esfuerzos desplegados por el régimen no alcanzaron alterar en lo fundamental la correlación de fuerzas ni el mantenimiento del movimiento guerrillero, puesto en evidencia por la apertura de nuevos frentes, así como por la continuación de las acciones que determinaron que el ejército continuara perdiendo efectivos. Otro éxito fue que se logró publicar en la prensa los pronunciamientos del PGT por secuestros, lo que obligó al rompimiento de la censura oficial.

A pesar de la implementación de la estrategia insurgente, y aunque se pudo llegar a asestar significativos golpes al movimiento revolucionario, lo cierto es que el movimiento mantuvo su integridad en lo fundamental, sin que se lograran los objetivos propuestos por el régimen desde un inicio. No se logró el total aislamiento de guerrilla de su base social; las patrullas civiles no tuvieron el éxito esperado por el manejo adecuado del problema que parte del movimiento guerrillero, lo que imposibilitó la transformación del carácter del conflicto armado; el movimiento revolucionario no pudo ser destruido. A modo de resumen, pudiera señalarse que la

crisis del sistema se agudizó debido a que la política contrainsurgente trazada, si bien se anotó algunos éxitos, no logró sus objetivos finales.

“Victoria 82”, la gran ofensiva montada por Ríos Montt para acabar con el movimiento guerrillero, culminó en un fracaso a pesar de que dispuso de todos los recursos militares, políticos, económicos y diplomáticos con que contaba el régimen. Precisamente este fue un golpe de gracia. Los golpes parciales propinados a los insurgentes durante la gran ofensiva tuvieron sólo resultados temporales y el año 1983 presentó un accionar guerrillero que evidenciaba que la cacareada victoria del ejército era una falsedad y que las fuerzas revolucionarias aún estaban en condiciones de combate. La imposibilidad de presentar resultados reales a la clase dominante fue el factor determinante en la sustitución de Ríos Montt antes de que pudiera iniciar su anunciada campaña “Firmeza 83”.

Este factor tiene incidencia directa en la política norteamericana hacia Centroamérica. Si bien la crisis interna del gobierno de Ríos Montt y sus fracasos militares constituyeron los elementos determinantes de su caída, no puede perderse de vista el hecho de que la administración Reagan necesitaba en Guatemala un gobierno que sirviera a sus intereses agresivos a nivel regional, que permitiera llevar a cabo sus planes sin participación directa de tropas norteamericanas. Para ello se precisaba la garantía de una férrea unidad en el seno del ejército, que le fue expuesta en la proclama del 8 de agosto de 1983, a través de la cual se elevaba al poder a Mejía Víctores.

Esta comunidad de intereses entre los golpistas y el imperialismo se hizo manifiesta en los días precedentes, durante la reunión sostenida por el entonces Ministro de Defensa con el general Paul Gorman, jefe del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, a bordo del portaviones “Ranger”, que tomaba parte en las aparatosas maniobras militares que se desarrollaban en la costa atlántica hondureña. En la reunión participaron también los ministros de Defensa de Honduras y El Salvador. Pocos días después se dieron a conocer los acuerdos de cooperación militar concertados con este último. Una vez instalado en el poder, uno de los primeros pasos del nuevo gobernante guatemalteco fue involucrar de forma activa al país en el conflicto mediante la revitalización del CONDECA. En su primera comparecencia pública Mejía Víctores declaró que Nicaragua constituía un peligro para la seguridad del continente y que el conflicto centroamericano debía ser resuelto por las partes involucradas, con lo que descartaba la importancia del papel que desempeña el Grupo de Cantadora. Al mismo tiempo indicaba que la política de Reagan era la idónea para la región.

Mejía Víctores no varió en lo esencial los postulados contrainsurgentes dictados por su predecesor y se enfrentó a los mismos problemas sin lograr llevar a cabo cambios que se tradujeran en una mayor estabilidad para el régimen. Por el contrario, continuaron surgiendo elementos que contribuyen al empeoramiento de la situación. Las contradicciones existentes dentro del mismo ejército, que pretendieron ser solventadas por el golpe, se han agudizado. La emisión de la Nueva Ley Constitutiva

del Ejército no fue más que un instrumento jurídico por medio del que se intentó institucionalizar una quimérica unidad interna, muy distante de existir.

La creación del alto mando devino parte de la maniobra ideada para desplazar a aquellos elementos de la oficialidad que discrepaban de la dirección, a la vez que se ignoraba la Junta de Comandantes, cuyas decisiones habían sido las determinantes en los dos años precedentes al ascenso de Mejía. La ley no era más que una manifestación de la necesidad imperiosa de reestructurar el organismo militar en el que persiste el fraccionamiento después de los golpes e intentos de golpe que tuvieron lugar durante 1982 y 1983.

Cuando Ríos Montt asumió el poder el 23 de marzo de 1982, lo hizo con el apoyo de un grupo de oficiales jóvenes de mentalidad fascista con aspiraciones a escalar la cúpula militar, bajo el control de la vieja promoción de generales. El golpe de Estado del 8 de agosto del 83 terminó con las ínfulas de unos y otros. No obstante, a pesar de las maniobras de desplazamiento llevadas a cabo en el interior de las fuerzas armadas, las contradicciones persisten, determinadas sobre todo por la situación de guerra que vive el país, en la que la participación directa en el combate constituye un medio para ganar méritos frecuentemente opacados por la derrota o la desmoralización provocada por las pírricas victorias obtenidas a través del genocidio.

Mediante la nueva legislación el régimen pretende solucionar las contradicciones existentes. Uno de sus puntos centrales es el rápido relevo de los generales, ya que se establece un período temporal máximo para el ejercicio de sus funciones, así como otras limitaciones relacionadas con el desempeño de otras funciones y cargos en la administración pública o en empresas particulares, la no integración en el alto mando o el no desempeño de cargos militares.

Estas medidas se han visto acompañadas de una vasta campaña de propaganda destinada a crear la ilusión de que los militares regresarán a sus cuarteles y de que el ejército es, según estipula la Constitución, una institución apolítica. Con ello se pretende nuevamente contribuir a fabricar una fachada aperturista que contribuya a crear el clima político favorable a la celebración de las elecciones anunciadas para 1985.

No obstante, el régimen enfrenta dificultades para el desarrollo de sus planes seudodemocratizantes, especialmente las contradicciones dentro de la clase dominante, que se han manifestado en los desacuerdos con la jerarquía eclesiástica y con los partidos políticos tradicionales, especialmente con el MLN, que se muestra activo en la búsqueda de alianzas. Este factor se ha convertido en una constante durante las últimas dos décadas, en que los partidos tradicionales trataron de sacar provecho de sus relaciones con el ejército. Firmaron pactos y alianzas con vistas a la obtención de cuotas de poder, especialmente en los períodos electorales. Durante los últimos años los partidos tradicionales de mayor peso —el MLN y el CAN— se han mostrado activos en la búsqueda de alianzas para tratar de cambiar la correlación de fuerzas frente al ejército. Para ello intentan captar fuerzas en su interior. Una de las manifestaciones de este fenómeno tuvo su expresión durante el período de Ríos Montt, a través de un grupo que utilizó como vehículo informativo el telenoticiero

“Aquí el Mundo”. Esta tendencia, de extrema derecha, aspiraba a brindar a la guerra una conducción más organizada con el objetivo de tratar de hacerla más efectiva. Los sucesivos golpes de Estado o los intentos que han tenido lugar, así como los fraccionamientos que han motivado el propio sistema electoral implementado por Ríos Montt, indican la existencia de una sorda lucha por parte de los distintos sectores políticos para tratar de captar fuerzas.

Dentro de este panorama la institución principal del país, el ejército, no puede permanecer ajena.

Otro factor que incide directamente en el aspecto psicológico de la tropa son los continuos fracasos que han evidenciado deficiencias por parte de los altos mandos que trazan y llevan a cabo la política contrainsurgente, la que en su largo desarrollo ha sido incapaz de lograr sus objetivos. Esto provoca cuestionamientos que se desatan por las ambiciones personales de los que se consideran más aptos para conducir la guerra, como fue el caso de los oficiales jóvenes del 23 de marzo de 1982, quienes a su vez fueron objeto de ataque de la nueva camarilla que afloró el 8 de agosto del año siguiente.

La tendencia a la fragmentación tiene una expresión más pública por parte de quienes han sido desplazados y que por lo tanto reniegan de la pérdida del status que sus posiciones le conferían. Se trata de un grupo más reducido. Entre estos figuran el antiguo jefe del Estado Mayor durante la época de Lucas García, y su hermano el general Benedicto Lucas, que pronunció declaraciones sobre el resquebrajamiento de la disciplina interna dentro del ejército. En el grupo aparece también el general Gordillo, miembro de la Junta Provisional que surgió como consecuencia del 23 de marzo, y que estuvo en el umbral de la Presidencia.

Estas manifestaciones no constituyen sino expresiones de las grietas existentes dentro de la institución armada, por los factores antes apuntados y por los intereses de orden político que responden a aspiraciones de los agroexportadores en su conjunto, que en el caso de Benedicto Lucas son los algodóneros y productores de cardamomo.

En líneas generales, habría que señalar que persiste una sorda pero permanente situación de crítica con respecto a la forma en que se conduce la guerra, no sólo por parte de los integrantes de las filas de la institución armada, sino además de muchos oficiales que han sido retirados por diversas vías y que coinciden en que las distintas jefaturas que han estado al frente de esta institución han venido a empeorar la situación de la guerra en virtud de sus políticas erradas.

El problema principal para el régimen continúa siendo el movimiento guerrillero, que constituye el motor fundamental de la actuación del gobierno. En este sentido habría que apuntar que de todos los ejércitos centroamericanos el guatemalteco es precisamente uno de los más tecnificados, y con mayor experiencia en la lucha antiguerrillera. Cuenta con su propia escuela de tropas especiales: el “Hogar Infierno Kaibil”, que se caracteriza por su crueldad. Desde 1981 dispone de una Escuela Militar de Electrónica y Transmisiones, a la que se agrega una Escuela Técnica Militar de Aviación que se fundó en 1983 y que es la única que existe en la región. Además cuenta con una escuela para cuadros contrainsurgentes, el Centro de Estudios

Militares. En el nivel alcanzado por las fuerzas armadas guatemaltecas ha resultado determinante la asistencia brindada por los gobiernos de los Estados Unidos, Israel, Argentina, Chile y Taiwán. Según fuentes revolucionarias, se calcula que dispone de alrededor de tres mil efectivos que han recibido entrenamiento en bases norteamericanas, y de pilotos adiestrados en escuelas norteamericanas y en la Academia de Guerra de Chile. A partir de 1981 contó, al igual que el régimen argentino, con un sistema de computadoras con fines militares, operando desde la Regional de Telecomunicaciones. Estos factores resultan determinantes en el hecho de que pese a la catastrófica situación económica por la que atraviesa el país y a contrapelo de la reducción de los gastos generales de la nación en un 11,3% en 1983, el presupuesto del Ministerio de Defensa se calcula en 179 millones de dólares, lo que equivale a un aumento del 62% con respecto al año fiscal anterior. Ello se logró afectando otros servicios de orden fundamental, *v. gr.*, los de salud y educación, que inciden directamente en el bienestar y nivel de vida de la población. Habría que agregar otros factores que inciden en el aumento de los gastos destinados a la Defensa, el planificado aumento de los efectivos policiales y el inicio de actividades de la fábrica de armas y municiones montada con ayuda israelí, que comenzó a funcionar en Cobán, Alta Verapaz, en mayo de 1983.

Empero, independientemente de todos los esfuerzos desplegados en el orden militar, el régimen —al igual que su predecesor— se ha visto imposibilitado de participar directamente en el conflicto regional en virtud de las serias dificultades internas que continúa confrontando. Destinar parte de sus efectivos fuera del territorio nacional implicaría necesariamente bajar la guardia interna en un momento en que las fuerzas revolucionarias armadas continúan activas pese a los enormes recursos invertidos para tratar de contrarrestar su desenvolvimiento. La indecisión y finalmente la negativa del régimen a participar en las maniobras “Ahuas Taras III” demuestran a las claras que Mejía Vítores, pese a su “dureza”, dista mucho de ser el “hombre fuerte” que el imperialismo esperaba para lograr detener el movimiento revolucionario en el país y el pleno involucramiento de Guatemala en el conflicto regional.

Lo anterior se vio confirmado por declaraciones del Jefe del Estado Mayor General del Ejército, coronel Rodolfo Lobos Zamora, quien reconoció que los insurgentes incrementan sus acciones político-militares y aceptó que el ejército está en desventaja debido a que la guerrilla actúa en la clandestinidad.

## **CONCLUSIONES**

La crisis por la que atraviesa la sociedad guatemalteca incluye elementos económicos, políticos y sociales. Cada uno de ellos, por separado y en conjunto, tiene un peso determinante en este sentido. Independientemente del General de turno que se encuentre al frente del gobierno y de las medidas que implemente para tratar de salvar la dominación de clase, la crisis es de orden estructural. Se ha gestado en el largo devenir histórico de esa sociedad profundamente escindida en clases y por lo tanto continuará actuando hasta tanto no se solucionen las causas que la originan.

Este ensayo persiguió demostrar que a partir de la década de los 80 las condiciones de esa crisis se fueron ahondando, y que con ello se aceleró el desgaste de un sistema condenado irremisiblemente a perecer. En esta etapa se trata de implementar una estrategia de gobierno que intenta salvar una situación ya insostenible poniendo en función de sus planes toda la vida nacional. No obstante, estas medidas emergentes están destinadas al fracaso. Parten de premisas falsas y no pueden solucionar ninguno de los problemas vitales de la sociedad guatemalteca.

Dentro de este contexto, el movimiento revolucionario será el elemento fundamental. Con su presencia irá presionando el régimen y hará saltar los resortes de una imposible estabilidad en la que basaría su supervivencia.

Con sus acciones los guerrilleros lograron el desgaste de un enemigo muy superior en fuerzas y armamento, obligándolo a la adopción de estrategias desesperadas que no han hecho sino ahondar la crisis en que la propia guerra lo ha sumergido.

Este factor ha determinado que se acelere la depauperación del sistema y que se acorten considerablemente sus etapas. Si bien el gobierno de Lucas logró mantenerse en el poder durante los cuatro años estipulados por el período presidencial, el de Ríos Montt solamente supervivió apenas dieciséis meses, a pesar del esfuerzo que desplegó por elaborar un complejo plan nacional de salida de la crisis. El de Mejía Víctores, encargado de llevar a vías de hecho la nueva estrategia, daba muestras de un profundo desgaste al comenzar su segundo trimestre de gobierno. Antes de cumplirse un año de su llegada al poder, son cada vez más frecuentes los rumores de golpe de Estado, sin que siquiera haya podido anotarse algún éxito de relevancia en la recuperación de la situación actual.

Independientemente de los golpes que el ejército oficial haya podido propinar al movimiento revolucionario, e incluso de los problemas internos que este haya enfrentado, los revolucionarios guatemaltecos no sólo han resistido la gran ofensiva, sino que la han sobrepuesto, iniciando una nueva etapa de la guerra.

En su aspecto económico y social el fenómeno de la crisis resulta insalvable por su origen histórico. Con ello se crean las bases favorables para la acción revolucionaria. Este constituye un hecho que ninguna estrategia, por acabada que sea, podrá modificar.

La situación existente contribuyó a la polarización de fuerzas en la sociedad guatemalteca, especialmente en los últimos años, en los que se demostró la imposibilidad del resurgimiento de opciones centristas o de legitimizar el proceso mediante el libre juego electoral burgués. Frente al terror implantado en Guatemala por los regímenes militares la única alternativa que queda a las masas es la que plantean las fuerzas revolucionarias. No se trata de una tesis triunfalista, sino del resultado que se deriva del análisis de la realidad objetiva. Frente al proyecto contrainsurgente no existe otra opción que no sea la de las fuerzas revolucionarias, no porque lo deseemos, sino porque la reciente realidad política guatemalteca así lo ha demostrado.

Aun en el caso de que se produjera un eventual triunfo de la reacción sobre las fuerzas revolucionarias, sería temporal como en los últimos años de la década de los



60, porque en el marco de las contradicciones existentes no se vislumbran condiciones para que la clase dominante supere la crisis y ofrezca un proyecto alternativo viable.

Caracterizan la situación la endeblez del Estado guatemalteco y de su clase dominante, que ha circunscrito sus funciones al ejercicio del terror y a su dependencia al imperialismo.

Las fuerzas revolucionarias se han convertido, pues, en las únicas portadoras de un proyecto nacional que sólo podrá ser realizado mediante la previa destrucción del Estado y la construcción de un nuevo orden en el que estén representados todos los sectores patrióticos, populares y democráticos, según reza el programa político de la URNG.

### CUADRO ELECTORAL DE 1982

Partidos y coaliciones	Candidatos	Alineamiento
Frente Unidad Nacionalista (FUN)	General Aníbal Guevara Rodríguez	Derecha
Partido Revolucionario (PR) Democrático	Ramiro Ponce Monroy (Vicepresidente)	
Partido Institucional Democrático	Alejandro Maldonado	
Partido Nacional Renovador (PNR)	Aguirre	Derecha
Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG)	Roberto Capiro Nicolle (Vicepresidente)	
Movimiento Liberación Nacional (MLN)	Mario Sandoval Alarcón Leonel Sisniega Otero (Vicepresidente)	Ultraderecha
Central Auténtica Nacionalista (CAN)	Gustavo Anzueto Vilman Luis Alfonso López (Vicepresidente)	Ultraderecha

FUENTE: “La danza electoral”, en *Erupción internacional*. Ed. ORPA, p.28.

# FUERZAS Y PARTIDOS POLÍTICOS QUE SE PERFILAN CON MOTIVOS DE LAS ELECCIONES PARA LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE

Partidos existentes antes del golpe de 1982	Candidatos	Lideres
1. PR (Partido Revolucionario)	1. PR	Lic. Héctor Napoleón Alfaro Lic. Jorge García Granados (en la actualidad marginado)
	2. PR Azul y Blanco y (Fracción)	Danilo Roca Rafael Pantoja
	3. Alianza Democrática (Fracción)	Lic. Leopoldo Urrutia
	4. Indigenista	Prof. Tezahuic Tohon Rafael Téllez
2. PID (Partido Institucional Democrático)	5. PID	Dr. Trinidad Ucles Tte. Cnel. Rafael Castillo Valdez
3. FUN (Frente Unidad Nacionalista)	6. FUN	Gabriel Girón (Secretario General)
4. MLN (Movimiento Liberación Nacional)	8. MLN	Mario Sandoval Alarcón Rudy Fuentes Sandozal
	9. MLN (escisión)	Leonel Sisniega Otero Tiene contactos con grupos golpistas dentro del ejército
5. PNR (Partido Nacional Renovador)	10. PNR	Mario Castejón (Secretario General) Capturado por críticas a Ríos Montt Alejandro Maldonado Álvaro Arzu. Se rumora su escisión.
6. CAN (Central Auténtica Nacionalista)	11. CAN	General Carlos Arena Osorio Lic. Alfonso López (Secretario General) Arquitecto Anzueto Vielman Lic. Ricardo Gómez Profesor Guillermo Villar Aída Alonso
7. DCG (Democracia Cristiana Guatemalteca)	12. DCG	Vinicio Cerezo (Secretario General) Rene de León Schoter

		Alfonso Cabrera (Secretario Adjunto)
	13. DCG tendencias	Danilo Barillas
	14. Partido Social Cristiano (Escisión)	Disputa la Secretaria General Dr. Carlos Gehler Mata (ex-Sec. General de la DCG). Posiblemente será este el próximo partido oficial. Se han integrado a él asesores de Ríos Montt, entre ellos “consejeros indígenas” y Dirigentes de la iglesia del Verbo.
8. FUR (Frente Unido de la Revolución)	15. FUR	Ing. Jorge Serrano Elías Félix Sarazua Guillermo Colom Argueta (en el exilio)
	16. FUR tendencia	Cesar Augusto Toledo
	17. Unidad Revolucionaria Nacional (escisión FUR)	Carlos Duarte (en el exilio)
	18. FUR	Lic. Humberto González Gamarra
9. PSD (Partido Socialista Democrático)	19. PSD	Carlos Morales Miguel Ángel Andrino Dr. Carlos Gallardo (en el exilio)
	20. PSD tendencia	Mario Solórzano (en el exilio)
	21. PSD tendencia	Haroldo Rodas
	22. Partido Petenero	Periodista Galvez Mish
	23. Movimiento Emergente de Cordialidad	Profesor Rubén Darío Chávez.
	24. Partido Equicrático de Reconciliación Nacional	
	25. Partido Populista	Arquitecto Acisclo Valladares Capturado por crítica a Ríos Montt
	26. Unión Católica Guatemalteca	Mario León Rosell

27. Partido Obrero  
Campesino

Integrado por grupos indígenas y  
representantes indígenas del  
Consejo de Estado. Por las  
amenazas de muerte que recibieron  
decidieron integrarse al Partido  
Social-Cristiano.

28. Partido Evangélico

---